



Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA

EXPEDIENTE No.: 11001 33 35 010 2016 00174 00.
ACCIONANTE: JUAN CARLOS GÓNGORA CASTRO.
ACCIONADO: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL.
CLASE: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

De conformidad con el informe secretarial que antecede, se procederá a determinar si en el caso de estudio hay lugar a prescindir de las audiencias y proferir sentencia anticipada.

Sea lo primero señalar, que el artículo 182A del C.P.A.C.A., faculta al Juez para proferir sentencia anticipada sin necesidad de celebrar audiencia presencial o virtual, es decir, antes de celebrar audiencia; entre otros, en los siguientes eventos: **(i)** cuando el asunto sea de puro derecho; **(ii)** cuando no haya que practicar pruebas, **(iii)** cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación, y sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento, y, **(iv)** cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

Entonces, cumpliendo lo dispuesto en el artículo antes citado, se procede a verificar en el presente asunto, si están dadas las condiciones para prescindir de las audiencias del juicio oral.

En el presente proceso se pretende que se declare la nulidad de la Resolución No. 2923 del 17 de mayo de 2012, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la cual se retiró del servicio activo al demandante; con el correspondiente restablecimiento de derecho.

Acto seguido, se analizará la existencia de excepciones previas por resolver y el decreto de pruebas.

I. EXCEPCIONES PREVIAS.

La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, dio contestación al medio de control tal como consta a folios 169 a 177 del expediente, proponiendo como excepción previa la de caducidad.



Para resolver se tiene que, se tiene que de conformidad con lo previsto **por numeral 2 literal d) del artículo 164 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo**, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho caduca al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto, según fuere el caso.

Por su parte, el inciso 7º del artículo 118 del Código General del Proceso, establece que cuando el término sea de meses o de años su vencimiento será el mismo día que empezó a correr del correspondiente mes o año, e indica que si su vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.

Ahora bien, de la revisión del acto administrativo del cual se pretende su nulidad, este es la Resolución 2923 del 17 de mayo de 2012, se extrae que *“**parágrafo.** Los Oficiales Superiores citados en este artículo continuaran dados de alta en la Tesorería Principal del Comando del Ejército Nacional, por el término de tres (3) meses contados, a partir de la fecha de retiro, para los efectos previstos en el artículo 164 del Decreto Ley 1211 de 1990”*, se entiende que el término de caducidad comenzó a correr el día **18 de agosto de 2012** y vencía el día **18 de diciembre de 2012** tomando como fecha última, el día final de ejecución del acto administrativo mencionado, en la medida que no se probó una fecha cierta de notificación personal de la actuación.

Igualmente, a la luz de lo establecido por el artículo 3 del Decreto 1716 de 2009, reglamentario del artículo 13 de la Ley 1285 del mismo año, el término de caducidad se suspende con la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial ante el Ministerio Público y sus efectos cesarán una vez se logre el acuerdo conciliatorio, o se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la Ley 640 de 2001 o hasta que venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud, lo que ocurra primero.

En sub lite, el Despacho encuentra que la demandante en aras de dar cumplimiento al requisito establecido por la referida Ley 1285 de 2009, según constancia de conciliación allegada al expediente, elevó solicitud de conciliación prejudicial ante el Ministerio público “Procuraduría 81 Judicial I Para Asuntos Administrativos”, el día 10 de septiembre de 2012, por lo que de conformidad con la norma antes señalada, se produjo la suspensión del término de caducidad (4 meses), el cual venía transcurriendo desde el día 18 de agosto de 2012, faltando así tres (03) meses ocho (08) días para su cumplimiento.

Ahora bien, la conciliación prejudicial fue declarada fallida el 21 de noviembre de 2012, con lo cual a primera vista sería dable decir que desapareció con ello, la causa que originó la suspensión, rehabilitándose de esta manera el término de caducidad (4 meses) de que trata el artículo 164 C.P.A.C.A, circunstancia por la cual el interesado, estaba compelido para acudir ante la Jurisdicción



Contenciosa Administrativa dentro del tiempo que le restaba, esto es, hasta el 1° de marzo de 2013.

Conforme con lo anterior, teniendo en cuenta que la demanda en curso fue radicada el 31 de enero de 2013 ante el H. Consejo de Estado, quien posteriormente remitió las diligencias a esta Instancia al considerar que carecía de competencia para conocer el asunto, para el Juzgado es evidente que el ejercicio de dicha acción se realizó dentro del término contemplado por la norma para impetrar el medio de control, por lo tanto la excepción de caducidad propuesta por la entidad demandada no tiene vocación de prosperidad.

Así las cosas, dado a que esta Agencia Judicial no considera necesario proponer excepciones previas de oficio, se entiende agotada esta etapa procesal.

II. PRUEBAS PARA DECIDIR DE FONDO

La parte demandante aportó prueba documental obrante a folios 3 a 59 del expediente. Solicita se decrete las siguientes pruebas documentales:

1. Oficiar a la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional para que allegué copia de i) la hoja de vida y ii) acto administrativo mediante el cual se dispuso el llamamiento a curso para acenso del accionante y la orden administrativa de personal del Comando, mediante la cual se publicó el curso de comando del oficial retirado en forma discrecional.

Con respecto a la solicitud de la Hoja de vida del demandante, la misma será decretada por ser útil y pertinente, para adoptar una decisión de fondo en el presente asunto; frente a la copia del acto administrativo mediante el cual se dispuso el llamamiento al curso de ascenso, no será decretada teniendo en cuenta que el mismo ya obra en el expediente a folios 31 a 34 del expediente.

2. Oficiar a la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional para que allegue copia autentica de las actas o documentos que recomendaron retirar al señor Juan Carlos Góngora Castro del comité de evaluación, así como del concepto de la junta asesora de esa Entidad.

3. Solicitar al Ministerio de Defensa Nacional, copia de la Resolución 2923 de 2012 y del acta No. 15 del 12 de diciembre de 2011.

Frente a la solicitud de las copias autentica de las actas o documentos que recomendaron retirar al señor Juan Carlos Góngora Castro del comité de evaluación y del acta No. 15 del 12 de diciembre de 2011, serán decretadas



teniendo en cuenta que son útiles y pertinentes. De otra parte, se negara la copia de la Resolución 2923 de 2012, teniendo en cuenta que la misma ya obra en el expediente.

Por parte de la entidad demandada, no allegó documental alguna como prueba y tampoco solicitó la práctica de pruebas.

Resuelto lo anterior, entonces, la **FIJACIÓN DEL LITIGIO** consiste en establecer si el demandante tiene derecho o no a que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional lo reintegre al grado y cargo que venía desempeñando o a otro de superior categoría, con efectividad a la fecha de desvinculación del servicio; de igual forma, a que reconozca y pague todos los sueldos y demás prestaciones sociales desde la fecha de su retiro hasta cuando sea efectivamente reintegrado al cargo y grado que corresponda, junto con los intereses e indexación a que haya lugar.

Por lo expuesto, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,

DISPONE

PRIMERO.- DECLARAR no probada la excepción de caducidad propuesta por la Nación Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, conforme con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO.- DECLARAR que no existen excepciones previas por resolver, por las razones antes expuestas.

TERCERO.- INCORPORAR al proceso con el valor legal que les corresponda, todos y cada uno de los medios de prueba que acompañan la demanda, así como las legales oportunamente aportadas al proceso.

CUARTO.- DECRETAR las siguientes pruebas documentales: i) hoja de vida de Juan Carlos Góngora Castro con cédula de ciudadanía No. 17.344.820 de Villavicencio, ii) acto administrativo mediante el cual se dispuso el llamamiento a curso para acenso del accionante y la orden administrativa de personal del Comando, mediante la cual se publicó el curso de comando del oficial retirado en forma discrecional y iii) copia del acta No. 15 del 12 de diciembre de 2011, por las razones expuestas en la parte motiva del presente auto.

Asignar la carga de la prueba a la parte actora por ser quien la solicitó y persiguen demostrar hechos de la demanda. Sin embargo, la entidad



demandada deberá prestar colaboración para responder los respectivos oficios. La Secretaría del Juzgado expedirá los oficios dirigidos a la Entidad demanda, pero corresponde el accionante retirarlos y radicarlos oportunamente. A la autoridad oficial se le concede un término de quince (15) días para que remita los documentos solicitados.

QUINTO.- Prescindir de las audiencias presenciales o virtuales y tramitar el proceso de conformidad con lo normado en el artículo 182A del C.P.A.C.A.

SEXTO.- La **FIJACIÓN DEL LITIGIO** consiste en establecer si el demandante tiene derecho o no a que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional lo reintegre al grado y cargo que venía desempeñando o a otro de superior categoría, con efectividad a la fecha de desvinculación del servicio; de igual forma, a que reconozca y pague todos los sueldos y demás prestaciones sociales desde la fecha de su retiro hasta cuando sea efectivamente reintegrado al cargo y grado que corresponda, junto con los intereses e indexación a que haya lugar.

SÉPTIMO.- RECONOCER personería adjetiva a **GERANY ARMANDO BOYACÁ TAPIA** con cédula de ciudadanía No. **80.156.634** expedida en Bogotá y Tarjeta Profesional No. **200.836** del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en este proceso como apoderado de la **NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL**; en los términos y para los efectos del mandato allegado al expediente del expediente.

OCTAVO.- Una vez allegadas las pruebas decretadas en el presente proveído, ingrésese al Despacho para continuar el trámite procesal a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


JOSÉ VICENTE CIFUENTES SALAZAR
JUEZ

20/11